

mente valiosos, como son la fuerza o capacidad de trabajo de una persona, la clientela, etcétera.

**502.**—Según una opinión muy divulgada, y que puede considerarse prevalecte entre numerosos autores (Salvat, Lafaille, Spota, Busso), el patrimonio no sólo estaría formado por derechos, sino también por las deudas. Por nuestra parte, consideramos inadmisibles este punto de vista. El patrimonio concebido como un conjunto de derechos y deudas es una noción oscura, falsa y, desde luego, inútil. Supone contrariar el sentido idiomático y vulgar de aquella palabra, que, según el diccionario de la Real Academia, significa el conjunto de bienes, la hacienda de una persona. Es verdad que el significado gramatical de una palabra puede diferir del jurídico; pero ello es una contingencia indeseable, que conviene evitar para impedir equívocos y en la cual no debe caerse si, como en nuestro caso, no hay razón alguna que lo justifique. Lo claro, lo que todo el mundo entiende, es lo siguiente: el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona; las deudas no forman parte de él: simplemente lo *gravan*. Este es el concepto corriente en la doctrina alemana.

**503-504. La concepción clásica.**—Según la doctrina clásica, el patrimonio es una universalidad de derecho y se concibe como un *attributo* de la personalidad, como una emanación de ella. De esta idea se desprenden las siguientes consecuencias:

- a) Toda persona tiene *necesariamente* un patrimonio, aunque no posea actualmente ningún bien.
- b) Nadie puede tener más que un solo patrimonio; éste es, por lo tanto, *único e indivisible*.
- c) El patrimonio es siempre *idéntico* a sí mismo: es una unidad distinta y separada de cada uno de los elementos que lo componen. No importa que salgan algunos bienes e ingresen otros; inclusive, es indiferente que haya o no bienes o que las deudas superen al activo: el patrimonio es siempre el mismo, tal como ocurriría con una bolsa que puede estar llena o vacía, pero siempre es la misma bolsa.
- d) El patrimonio es *inalienable*: podrán enajenarse los bienes que lo

## CAPÍTULO X

### EL PATRIMONIO

#### § 1.—Nociones y caracteres

**501. Definición.**—Dentro del conjunto vasto y heterogéneo de derechos de que las personas son titulares (derechos personalísimos, políticos, de familia, propiedad, hipoteca, prenda, creditorios, intelectuales, etc.), hay algunos que sirven para la satisfacción de sus necesidades económicas y que, por ello, pueden apreciarse en dinero; el conjunto de estos derechos constituye su patrimonio.

Quedan, por consiguiente, fuera de él los inherentes a la personalidad (tales como el derecho al honor, a la vida, a la libertad) y los de familia (como los que nacen entre cónyuges, la patria potestad, tutela, curatela, etc.), aunque a veces tienen repercusión económica. Así, por ejemplo, una lesión corporal producida por un hecho ilícito hace nacer el derecho a la indemnización de los daños; la patria potestad lleva implícito el usufructo de los bienes de los hijos. Pero ni el derecho a la integridad física, afectado en el primer caso, ni la patria potestad, implicada en el segundo, tienen por objeto satisfacer necesidades de carácter económico, ni son valorables en dinero. Es verdad que, en caso de una lesión a la vida, a la libertad, al honor, el daño causado se repara con el pago de una suma de dinero; pero ello no significa que aquellos derechos sean apreciables en dinero, sino que el hombre, en la insuficiencia de sus posibilidades, no posee otra forma de compensar el daño sufrido; pero el dinero será siempre un medio grosero e imperfecto de reparación. Si, en cambio, se tratara de una lesión a un derecho patrimonial, la reparación será plena y perfecta.

Tampoco forman parte del patrimonio algunos hechos económica-

integran, pero nunca la totalidad del patrimonio, ni siquiera una parte alícuota de él.

**505. Crítica: las doctrinas modernas.**— La concepción clásica, inspirada en Zachariae y desarrollada por Aubry y Rau, no ha podido resistir los embates de la crítica moderna.

Es falso concebir el patrimonio como un atributo de la personalidad y sostener que toda persona debe necesariamente poseer uno; esta afirmación, dice Covello, es ridícula, pues la vida demuestra que existen numerosas personas que carecen de todo patrimonio. Algunos ni siquiera son propietarios de la ropa que llevan puesta, como ocurre con ciertos menores, sacerdotes regulares, reclusos, etcétera, que tienen la que sus padres o la congregación o el Estado les facilitan. No se puede negar, sin embargo, que la relación entre persona y patrimonio es a veces muy estrecha, como ocurre si los bienes están al servicio de los fines personales y propios del dueño, que es el caso normal del patrimonio general; otras veces, en cambio, los bienes tendrán un destino especializado, no siempre coincidente con el del titular. De ahí que la noción del destino o fin al cual están afectados, cobre una importancia capital.

Es asimismo falso e inútil concebir al patrimonio como una *universalidad de derecho*, es decir como una unidad abstracta con existencia propia e independiente de cada uno de los objetos que lo componen. Un patrimonio sin contenido, concebido a través de la unidad del sujeto, es una idea sin sentido ni realidad. Si no hay activo, si no hay derechos, no hay patrimonio. Este debe concebirse, pues, como un *complejo concreto de derechos*; tanto es así, que no podrá citarse un solo caso en que el patrimonio considerado como individualidad distinta de sus elementos sea motivo de alguna relación jurídica; es, por tanto, nulo el interés de aquella concepción abstracta.

Tampoco es exacto que el patrimonio sea inalienable, puesto que la enajenación de bienes supone la de una parte de aquél. Inclusive es posible la alienación total, como ocurre, por vía de ejemplo, en el caso de una persona que profesa y hace donación de todos sus bienes a la orden religiosa en la cual ingresa.

Ni siquiera es totalmente verdadero que el patrimonio sea único e indivisible, pues hay casos en que una persona es titular de más de un patri-

monio. Pero este principio es, en general, aceptable, según hemos visto en el número siguiente.

En definitiva, la noción *subjetiva* del patrimonio ha sido reemplazada por otra de sentido *objetivo y realista*.

**506. El problema en nuestro derecho.**— En nuestro derecho, el artículo 2312 da un sólido apoyo a quienes sostienen que el patrimonio es un conjunto concreto de bienes (no una universalidad sin contenido) y que las deudas no forman parte de él; lo define simple y acertadamente como *el conjunto de bienes de una persona*. Pero más adelante, al tratar de las sucesiones, Vélez se enroló en la teoría de Aubry y Rau. El artículo 3281 dice que la sucesión tiene por objeto un todo ideal, sin consideración de su contenido especial. Esta contradicción ha dado lugar a discusiones doctrinarias en nuestro derecho. Lo cierto es que la contradicción de los textos permite al intérprete apartarse de las consecuencias rigurosas que pueden surgir de tal o cual sistema y dar a cada caso particular la solución mejor y que resuelva con mayor justicia los intereses en juego. De cualquier modo, es indudable el desprestigio, cada vez más acentuado, de la teoría de Aubry y Rau.

**507. Unidad del patrimonio y patrimonios separados.**— Aun hoy puede afirmarse que el patrimonio es, en principio, único e indivisible. Pero la unidad no surge ya del hecho de ser una *universalitas iuris*, idea falsa, sino de esta circunstancia que da cohesión al complejo de bienes: que el titular de todos los bienes es una sola persona. Esta circunstancia de pertenecer todos los bienes a una sola persona los agrupa y separa jurídicamente de los pertenecientes a otras personas.

Pero hay casos en que la misma persona posee dos o más patrimonios independientes entre sí. Los más importantes son los siguientes: 1º) cuando se acepta una herencia con *beneficio de inventario*; el heredero es titular a la vez de su propio patrimonio y del que recibe en herencia; 2º) cuando los acreedores del causante solicitan la *separación de patrimonios*. La aceptación con beneficio de inventario significa que el heredero responde por las deudas del causante, pero sólo hasta el límite de los bienes que de él reciba. La separación de patrimonios, en cambio, es pedida por los acreedores del causante, quienes en previsión de la posible insolvencia del heredero, reclaman esa medida para cobrarse sus créditos antes

antes de la venta judicial. Tratándose de bienes inmuebles, el embargo se lleva a cabo anotándolo en el Registro de la Propiedad; desde ese momento, el dueño no puede ya transferir la propiedad. Con respecto a los muebles, el embargo se lleva a cabo generalmente mediante su secuestro y entrega a un depositario, que puede ser incluso el propio deudor. En este último caso, el deudor no puede ya disponer de ellos sin incurrir en la responsabilidad penal de la que se hace pasible el depositario infiel.

El acreedor puede también pedir la *inhibición* de su deudor. Mientras que el embargo se refiere siempre a bienes *determinados*, la inhibición tiene un alcance *indeterminado*. Consiste en una anotación que se hace en el Registro de la Propiedad que priva al deudor de enajenar cualquier bien que estuviera allí inscrito a su nombre.

**509-2. Ejecución individual y colectiva.**—La ejecución del deudor puede ser individual o colectiva. En el primer caso, cada acreedor demanda a su deudor y ejecuta sus bienes hasta cobrarse su crédito. En el segundo, todos los acreedores proceden conjuntamente y se distribuyen el patrimonio del deudor de la siguiente manera: primero se paga a los acreedores privilegiados, de acuerdo con su rango; el saldo se distribuye entre los quirografarios a prorrata del monto de sus respectivos créditos. En el orden civil, este procedimiento se llama *concurso*; en el orden comercial, se denomina *quiebra*. El concurso puede ser pedido por el propio deudor, o bien por cualquiera de los acreedores, siempre que su crédito fuera quirografario y que todos o la mayor parte de los bienes del deudor se hallen embargados como consecuencia de otras ejecuciones. La quiebra puede ser pedida cuando el comerciante ha incurrido en cesación de pagos.

**510. Bienes no ejecutables.**—No todos los bienes están sujetos a la ejecución por los acreedores. Es importante destacar la evolución experimentada por el derecho en este punto, evolución inspirada en un sentimiento de caridad cristiana. De la prisión por deudas se ha pasado al reconocimiento de que algunos bienes son inembargables, siendo visible la tendencia de los últimos años a aumentarlos en número y proporción. El motivo que inspiran estas excepciones es siempre el mismo: que no debe privarse a los hombres de lo que es indispensable para cubrir sus necesidades más imprescindibles. Pero lo que se ha modificado últimamente es el concepto de cuáles son esas necesidades más imperiosas, que hoy se juz-

gan con espíritu amplio y generoso, incluyendo lo que es menester para una vida decorosa y para poder trabajar.

Es necesario cuidar, sin embargo, que en este camino no se avance más allá de los justos límites, porque ello sería favorecer la mala fe, el incumplimiento de la palabra empeñada y burlar las legítimas esperanzas de los acreedores.

En nuestra legislación son inembargables la pensión de alimentos (art. 374, Cód. Civ.), el hecho cotidiano del deudor y su familia, las ropas y muebles de su indispensable uso y los instrumentos necesarios para su profesión o industria (ley 12.296); por aplicación de esta disposición se ha declarado inembargable el juego de comedor, la radio, la máquina de coser, etcétera; el televisior ha dado lugar a jurisprudencia contradictoria, aunque ahora predomina el criterio de que el televisior color es embargable; asimismo son inembargables los sueldos y salarios dentro de una escala que va del 5% para las entradas de \$ 2.000 mensuales hasta el 20% para las mayores de \$ 5.000 (ley 14.443); las jubilaciones y pensiones, salvo por deudas derivadas de la obligación de pasar alimentos; la indemnización por accidente de trabajo (art. 13, ley 9688); el subsidio por maternidad (ley 11.933); el aguinaldo (art. 5º, ley 12.913); la indemnización por despido y falta de preaviso (art. 157, ley 11.729); el bien de familia, la pensión de alimentos, etcétera.

**511. Acciones patrimoniales.**—Puesto que el patrimonio del deudor es la garantía del pago de las deudas, es lógico reconocer a los acreedores el derecho a defenderlo. Mientras aquél administra normalmente su patrimonio, los acreedores nada pueden hacer; ellos han confiado en él y por tanto deben sufrir las consecuencias de sus desaciertos o de su mala fortuna. Pero eso no significa proteger su mala fe o su deliberada negligencia. De ahí que se reconozca a los acreedores el derecho a ejercer las siguientes acciones:

a) *Acción de simulación*: a veces los deudores simulan un acto (generalmente la venta de un bien) para no pagar a sus acreedores. Estos pueden demostrar la simulación, volver las cosas a su estado real y cobrarse sus créditos de ese bien. Tratamos de esta acción más adelante (núms. 775 y sigs.).

b) *Acción pauliana o revocatoria*: el deudor no simula desprenderse

de que se opere la confusión de patrimonios; en estos dos supuestos, el heredero es titular, a la vez, de su propio patrimonio y del que recibe en herencia, 3º) cuando se ha recibido la posesión definitiva de los bienes de un ausente con presunción de fallecimiento, que forman un patrimonio separado del general del sucesor, 4º) cuando el deudor ha sido desapoderado de sus bienes por efecto de concurso o quiebra, 5º) cuando se forma un fondo de comercio, 6º) los bienes propios y gananciales de los cónyuges constituyen masas patrimoniales separadas. En el derecho moderno aparece en vías de imponerse la llamada *empresa individual de responsabilidad limitada*, que permitiría a la persona afectar parte de su patrimonio a una industria o comercio, separándolo de los demás bienes.

**508. El patrimonio como garantía de los acreedores.**—El patrimonio es la garantía del pago de las deudas, puesto que los acreedores tienen derecho a ejecutar los bienes del deudor y a cobrarse de ellos. Se dice comúnmente que es la *prenda común* de los acreedores. La palabra *prenda* no está tomada, desde luego, en el sentido de derecho real, que exige una cosa concreta sobre la cual recaer, mientras que el patrimonio es cambiante. Lo que ocurre es que los bienes del deudor, cualquiera que sea la fecha de su adquisición, responden por todas las deudas; pero el deudor mantiene la plena libertad para disponer de ellos, en tanto no se inicie el proceso de ejecución y se trabé embargo.

Es necesario, empero, hacer dos salvedades: en primer lugar, no todos los acreedores están en pie de igualdad para el cobro de sus créditos; en segundo término, no todos los bienes son ejecutables. Nos ocuparemos de estos temas en los párrafos siguientes.

**509. Distintas clases de acreedores.**—Puede ocurrir que los bienes del deudor no alcancen a cubrir sus obligaciones. En tal caso, no sería justo que todos los acreedores, cualquiera que sea el origen o naturaleza del crédito y las necesidades que está destinado a llenar, se satisfagan en un pie de igualdad. Ha sido preciso establecer un orden de preferencia, que contemple aquel problema. De ahí que existan distintas clases de acreedores privilegiados: con derecho real de garantía y comunes o quirografarios.

- a) Llámense privilegiados los acreedores que tienen un derecho

dado por la ley para ser pagados con preferencia a otros (art. 3875, Cód. Civ.). El privilegio nace siempre de la ley; la voluntad de las partes es impotente para crearlo (art. 3876). Salvo lo que se dirá más adelante sobre los derechos reales de garantía.

Los privilegios pueden ser *generales* y *especiales*. Los primeros recaen sobre la generalidad de los bienes muebles e inmuebles del deudor (art. 3879, Cód. Civ.: gastos de justicia, impuestos) o bien solamente sobre todos los muebles (art. 3880: gastos funerarios, de última enfermedad, salarios de la gente de servicio, etc.). Los privilegios especiales inciden sobre las cosas determinadas, sean muebles o inmuebles (v. arts. 3883 y sigs., Cód. Civ.).

b) Los acreedores que tienen a su favor un derecho real de garantía, gozan también de una preferencia en el pago de sus créditos, nacida en este caso de la voluntad de las partes, apoyada en la ley. Tal ocurre con los acreedores hipotecarios, prendarios y anticresistas. En el derecho comercial está la prenda con registro, el *warrant* y los debentures. Se discute si estas preferencias deben o no ser calificadas como privilegio. Algunos autores sostienen la negativa, fundados en que privilegio es aquel que surge exclusivamente de la ley; pero ha terminado por prevalecer en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, la tesis de que toda preferencia es genéricamente un privilegio.

c) Finalmente, los acreedores comunes o quirografarios son los que carecen de toda preferencia; deben cobrar después de los privilegiados y de los que tienen a su favor un derecho real de garantía y lo hacen a prorrata de sus respectivos créditos, si los bienes del deudor no alcanzan a satisfacerlos en su totalidad.

**509-1. Acciones de los acreedores dirigidas a la ejecución de sus bienes; medidas previas: embargo e inhibición.**—Los acreedores a quienes su crédito les ha sido reconocido por sentencia judicial o que tienen un *título con fuerza ejecutiva* (se llama así al que permite al acreedor iniciar directamente la vía ejecutiva sin tener que instaurar acción ordinaria), tienen derecho a ejecutar los bienes de su deudor para cobrar su crédito del producido de la venta. Como medida previa a la venta en pública subasta y aun a la iniciación de la ejecución, los acreedores suelen *embargar* los bienes de sus deudores, para impedir que éstos dispongan de ellos.

de un derecho, sino que lo enajena realmente. Por ejemplo, vende un campo y oculta el dinero, que escapa así a la acción de los acreedores. Estos pueden, reunidas ciertas condiciones legales, tener por no ocurrido el acto, que les es inoponible, y hacer ejecución del bien para cobrarse sus créditos. Estudiaremos esta acción en los números 793 y siguientes.

c) *Acción subrogatoria u oblicua*: en este caso no se trata de una conducta dolosa y fraudulenta del deudor, sino de una inacción. Ocurre a veces que una persona cargada de deudas tiene también algunos créditos contra otras personas. Podría cobrarlos, pero no lo hace simplemente porque ese dinero no lo beneficiaría a él sino a sus acreedores, que serían en definitiva quienes lo van a percibir. Ejemplo: Pedro debe \$ 10 000 y es acreedor de \$ 1 000; si cobra esta suma, sus acreedores caerán sobre ella, de tal modo que Pedro no será otra cosa que un puente para que el dinero pase de sus deudores a sus acreedores. En otras palabras, él no tiene interés en ejercer esas acciones. En esta hipótesis, la ley concede a sus acreedores el derecho a *subrogarse* en las acciones de su deudor, vale decir, a ejercer las acciones que éste ha abandonado, lo que se llama acción oblicua. De esta manera, los acreedores hacen ingresar bienes al patrimonio de su deudor y luego pueden hacer ejecución de ellos.

## § 2.— Derechos patrimoniales

**512. Clasificación.**— Hemos dicho ya que derechos patrimoniales son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular y que son apreciables en dinero. Tradicionalmente se dividen en dos grandes categorías: reales y personales; en el derecho moderno se hace necesario admitir una tercera categoría, distinta de las anteriores, la de los derechos intelectuales. El estudio prolijo de todos ellos corresponde a los cursos de obligaciones y derechos reales; aquí nos limitaremos a dar una noción general que permita conocer la materia de que está compuesto el patrimonio.

**513. Derechos reales y personales.**— Para precisar estos conceptos resulta útil trazar un paralelo que ponga de relieve los puntos de contactos y las diferencias existentes entre las dos grandes categorías de derechos

patrimoniales. Al hacerlo, nos ceñimos a la concepción clásica de los derechos reales, a nuestro juicio la más clara y acertada, sin perjuicio de exponer enseguida otras teorías modernas.

*Derecho real* es un poder o facultad que se tiene directamente sobre una cosa; el típico es la *propiedad*, que importa un poder de señorío, de goce y de disposición de la cosa. Los restantes derechos reales no son, en el fondo, sino desmembramientos de ella.

*Derecho personal*, en cambio, es la facultad que se tiene de exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación; en otras palabras, es una vinculación jurídica, que une a dos personas (o grupos de personas) en virtud de la cual el deudor debe satisfacer al acreedor la prestación debida. Tal es el caso de la obligación de pagar una suma de dinero, de hacer una obra, de prestar un servicio.

**514.**— De esta diferencia conceptual se siguen las siguientes:

a) En los derechos reales no hay sino dos elementos: el *titular* y la *cosa* sobre la cual se ejerce el derecho; en los personales, en cambio, hay tres: el sujeto activo o *acreedor*, el sujeto pasivo o *deudor* y lo debido o *prestación*, que puede consistir en una obligación de *dar* (si, por ejemplo, se debe una suma de dinero), de *hacer* (v. gr., el contrato de trabajo) o de *no hacer* (como es la obligación del locador de abstenerse de todo acto que importe perturbar al inquilino en el goce de la cosa locada).

b) Los derechos reales se llaman *absolutos* en el sentido de que se tienen *erga omnes*, contra cualquiera que pretenda perturbar al titular en el goce de la cosa; dan origen a *acciones reales*, cuyo objeto es *mantener* el derecho y que se ejercen tantas veces como sea necesario para defenderlo. Por ejemplo, las acciones posesorias se dan contra quien perturbe la posesión y pueden ejercerse cada vez que haya una nueva perturbación. Los personales son *relativos*, pues se tienen contra personas determinadas, que son el o los deudores; por eso, las *acciones personales* sólo pueden dirigirse contra ellos y tienden a la *extinción* del derecho, pues una vez cobrado el crédito, cesa la obligación. Si Pedro debe a Diego \$ 10 000 y éste lo demanda para obtener el pago, logrado que sea el objeto de la acción, queda extinguido el derecho creditorio. Por excepción, las acciones derivadas de los derechos reales de garantía (hipoteca, prenda, etc.)

tienen, no al mantenimiento, sino a la extinción del derecho, puesto que son accesorios de una obligación de carácter personal.

c) El titular de un derecho real goza del *jus persequendi*, o sea la facultad de hacerlo valer contra cualquiera que se halle en posesión de la cosa; aunque el principio no es absoluto y sufre excepciones: una de ellas sería el caso del poseedor de buena fe de cosas muebles, contra quien no puede ejercerse reivindicación (art. 2412, Cód. Civ.). Los derechos personales, en cambio, no gozan de este privilegio.

d) También es inherente al derecho real el *jus preferendi*, en virtud del cual descarta a todos los derechos creditorios y, además, determina su rango según su antigüedad (como en la hipoteca) o excluye cualquier otro (como el dominio). El derecho personal, al menos en principio, supone una completa igualdad para sus diversos titulares, salvo el caso de privilegios.

e) Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley y, por ello, su número es limitado. El Código Civil enumera el dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres activas, el derecho de hipoteca, la prenda y la anticresis (art. 2503). Habría que agregar, todavía, la posesión y los derechos reales del derecho mercantil: la prenda con registro, el *warrant*, los debentures. La prohibición de que las partes interesadas puedan crear otros derechos reales que aquellos establecidos en la ley (art. 2502, Cód. Civ.) obedece a la preocupación del poder público por todo lo atinente al régimen de la propiedad, a la cual se vinculan estrechamente ellos, y que podría quedar alterada en sus mismos fundamentos si se admitiese la libertad de convenciones; es éste un problema de capital importancia para el orden económico social. En cambio, los derechos personales son ilimitados en su género; las partes pueden crear tantos como convenga a sus intereses, formando el contrato una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (art. 1197, Cód. Civ.).

f) Por razones análogas a las explicadas en el apartado anterior, la ley reglamenta, por lo general, las *formalidades* requeridas para la *transmisión de los derechos reales*, que son más rigurosas para el caso de que se trate de bienes inmuebles (escritura pública, inscripción en el registro,

tradición); en cambio, los derechos personales nacen o se transmiten sin ningún requisito formal.

g) Los derechos reales son susceptibles de adquirirse por *usucapión*, no así los personales, respecto de los cuales no es concebible la posesión, la cual, unida al transcurso del tiempo, constituye el fundamento de aquélla.

h) Los derechos reales tienen, en principio, una duración ilimitada, y no se extinguen por el no uso: la prescripción liberatoria no rige respecto de ellos. El derecho de propiedad no se pierde por más que el titular deje de ejercerlo por un número indefinido de años, a menos que otra persona adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Pero esta regla no es absoluta: los derechos reales de garantía se extinguen cuando prescribe la obligación personal de que son accesorios; el usufructo (art. 2924), el uso y la habitación (art. 2969) y las servidumbres activas (art. 3059) se extinguen por el no uso. En cambio, la prescripción liberatoria se opera respecto de todos los derechos creditorios no ejercidos durante los plazos fijados por la ley.

**515. Teoría de la obligación pasivamente universal.**— La concepción clásica de los derechos reales ha sido impugnada por Planiol. Sostiene el ilustre jurista francés que la idea de que los derechos reales establecen una relación directa entre una persona y una cosa, es falsa porque una relación de orden jurídico no puede existir sino entre personas; ésta es, afirma, una verdad axiomática y elemental para la ciencia del derecho. Y si se profundiza el análisis de los derechos reales, se verá que también en ellos hay sujeto activo y sujeto pasivo, entre los cuales, como en los derechos personales, se establece la relación jurídica. En nuestro caso, los obligados serán todos los integrantes de la sociedad, que tienen el deber de respetar el derecho real, de abstenerse de todo hecho que lo perturbe; es, pues, una obligación de no hacer que pesa sobre el resto de la colectividad y que por ello puede llamarse *pasivamente universal*. De ahí se desprende que la diferencia entre derechos reales y personales no es esencial, sino que se traduce solamente en lo siguiente: mientras que en estos últimos el sujeto pasivo es determinado, en los primeros es indeterminado y de número ilimitado.

**516.**— Esta teoría nos parece más brillante que sólida. En primer término, no vemos por qué razón el derecho objetivo no puede amparar una relación directamente establecida entre una persona y una cosa. En verdad, creemos que existe aquí un equivoco respecto de la palabra *relación*. Es obvio y axiomático, como dice Plantol, que el derecho riga relaciones entre las personas, puesto que su campo de acción es precisamente la coexistencia humana. Pero ello no se opone de modo alguno a que proteja ciertos bienes del hombre, teniendo en mira precisamente una posible agresión por parte de los demás individuos. Y así como hay un derecho al honor, a la vida, etcétera, hay también un derecho sobre los bienes que sirven para la satisfacción de nuestras necesidades económicas. ¿Que error hay en decir, en este caso, que existe una relación directa entre el titular y la cosa? Y es que, en efecto, hay una vinculación directa entre ambos, puesto que ninguna otra persona se interpone ni puede legalmente interponerse en el uso y goce de la cosa.

Tampoco satisface la idea de la obligación pasivamente universal como característica de los derechos reales, puesto que el deber de respetar los derechos que tienen los miembros de una colectividad, existe tanto en el caso de los derechos reales como en el de los personales, y aun en los de carácter extrapatrimonial.

Finalmente, esta concepción supone poner el acento en algo que es completamente secundario en los derechos reales; porque lo esencial y característico de éstos no es la obligación pasiva que el resto de la sociedad tiene de respetarlos, sino el poder de goce y disposición que se reconoce al titular sobre la cosa.

No es extraño, por tanto, que esta teoría haya tenido una repercusión prácticamente nula en el derecho moderno.

**517. Derechos intelectuales.**— En el derecho antiguo no se conocían otros derechos patrimoniales que los reales y los personales. La explotación económica de la producción artística estaba suficientemente protegida con ellos: el escultor, el pintor, el artesano, eran dueños de su obra y podrían venderla. La literatura, en cambio, no ofrecía iguales posibilidades, puesto que la reproducción era manuscrita y, por tanto, el número de ejemplares limitadísimo. El aprovechamiento económico de la obra literaria era imposible y los autores, si no tenían fortuna propia, debían vivir de la generosidad de algún mecenas.

Fue la invención de la imprenta la que creó el problema al permitir la reproducción en grandes números. El autor se vio de pronto ante la posibilidad de obtener apreciables ganancias con la venta de ejemplares. Pero si bien se advirtió desde un comienzo la justicia de reconocerse al autor el derecho de lucrar con el producto de su ingenio, la imprenta creó otro problema no menos importante: hizo fácilmente reproducibles y divulgables todas las ideas políticas, económicas o religiosas, lo que se juzgaba peligroso para el Estado de aquella época. Se imaginó, entonces, un recurso que permitía conciliar el interés pecuniario del autor con el contralor de lo que pretendía imprimirse: la Corona concedía un *privilegio* para publicar la obra, si ésta no contenía nada que pudiera ser objeto de censura.

El sistema era, desde luego, insatisfactorio, puesto que los derechos del autor quedaban librados al arbitrio del príncipe; y cuando la Revolución Francesa hizo triunfar el principio de la libertad de imprenta, era ya inevitable reconocer a los autores un verdadero derecho de reproducir sus obras y explotarlás económicamente, sin depender de la concesión graciosa de un privilegio; y para acentuar categóricamente su calidad de derecho natural, no susceptible de ser desconocido, se lo llamó *propiedad intelectual*, denominación que, pese a su evidente impropiedad, tuvo éxito, precisamente porque importaba una reafirmación del derecho.

Casti al mismo tiempo sobrevino otro problema igualmente desconocido en la antigüedad. El maquinismo y la gran industria dieron lugar a la valoración económica de los inventos técnicos y científicos. La nueva figura jurídica de los derechos intelectuales venía también a proteger a los inventores.

**518.**— ¿Constituyen los derechos intelectuales una *propiedad*? Así son llamados en la Constitución Nacional (art. 17) y en la ley 11.723. Pero esta denominación sólo se explica como fórmula de combate, para justificar una protección tan completa como sea posible; y quizá por ello mismo cuenta todavía con algunos defensores, que destacan la circunstancia de que el autor tiene el disfrute de su idea, puede reproducirla, venderla, etcétera, tal como es dado hacerlo al propietario. Pero la analogía no es muy importante. Cualquier derecho patrimonial puede aprovecharse económicamente, cederse, negociarse. Por lo demás, la asimilación con la propiedad resulta insostenible. Es de la esencia misma de ésta la existencia de una cosa cierta y material sobre la cual recae el derecho; y las ideas no son

susceptibles de apropiación. Es verdad que también los derechos intelectuales tienen un objeto: la obra, sea invento, descubrimiento, escrito, cuadro, estatua, página musical. Pero la obra no como materia (tal como la concebían los romanos) sino en tanto *creación de la inteligencia*. No hay como en la propiedad un objeto que puede poseerse y ser aprovechado con la máxima ventaja, precisamente por su adjudicación exclusiva a determinada persona. La obra literaria o artística, la obra intelectual, necesita, por el contrario, el mayor campo de expansión posible para producir sus mejores frutos. Ella supone la divulgación en la comunidad, no la permanencia en la mente de su autor. ¿Podría decirse que el autor es dueño absoluto de su obra, que sólo él puede usarla, gozarla y aprovecharla?

Además, la propiedad es perpetua y los derechos intelectuales son esencialmente temporarios. Las ideas, ya lo dijimos, no son susceptibles de apropiación individual; pertenecen a la sociedad, puesto que son fruto de ella. El *Quijote* no hubiera podido escribirlo un aborigen africano, por más talento natural que tuviera, fue necesario que Cervantes naciera en la más hermosa España del siglo de oro. La televisión no hubiera podido ser inventada por el más genial físico de la antigua Grecia; se necesitó todo el inmenso aporte de la física moderna para llegar, luego de múltiples etapas, a la transmisión inalámbrica de la visión. Es justo, sin duda, que el autor o inventor pueda aprovechar de su nuevo aporte al progreso humano; pero también lo es que el fruto de la civilización sea gozado y aprovechado libremente por toda la sociedad después que el autor haya sido debidamente recompensado.

No hay, finalmente, interés alguno en hacer entrar por la fuerza los derechos intelectuales dentro de viejos moldes jurídicos que evidentemente no fueron hechos para ellos. Ya ni siquiera como bandera de lucha sirve la expresión de propiedad intelectual, pues las sociedades contemporáneas son más sensibles a la protección del trabajo que a la de la propiedad. Y lo lógico es vincular el derecho intelectual a la forma, quizá más noble, del trabajo humano.

Es necesario, por tanto, admitir que se trata de una tercera categoría de derechos patrimoniales, de naturaleza *sui generis*. Puede definirse como un *derecho a la explotación económica temporaria de la obra o idea intelectual*.

**519. Derecho moral del autor.**— La obra artística, técnica, científica,

ca, etcétera, origina, además de los derechos intelectuales de naturaleza patrimonial, el llamado *derecho moral de autor*. Es un derecho personalísimo, nacido de la necesidad de proteger eso tan íntimo y profundo que es el propio pensamiento. El autor tiene derecho a cuidar la integridad de la idea u obra, a perfeccionarla, a oponerse a que se deformen sus conceptos; puede decidir si la obra ha de publicarse o no, y en qué momento. En fin, puede oponerse a su publicación, e, incluso, destruirla. Este último derecho no es, sin embargo, absoluto. Parece justísimo reconocerlo en ciertos casos, como ocurriría con un literato o filósofo que sufre una evolución espiritual y abomina de sus primeras obras; aun cuando hubiera cedido sus derechos intelectuales sobre éstas a un tercero, conserva siempre el derecho a destruir las, quedando obligado, desde luego, a indemnizar al cesionario. Pero si se trata de obras expresadas en un solo ejemplar (cuadros, esculturas) el autor únicamente puede destruirlas si es, al propio tiempo, dueño de la cosa.

El derecho moral de autor, de naturaleza extrapatrimonial, se vincula con la personalidad misma del hombre y es, por lo tanto, *intransmisible e imprescriptible*. Sólo caduca en caso de expropiación de la obra por el Estado.

### § 3.— Bienes y cosas

**520. Concepto.**— Dentro de la terminología de nuestro Código<sup>5</sup> se llaman cosas a los *objetos materiales susceptibles de tener un valor* (art. 2311, Cód. Civ.).

Debe anotarse que en su redacción originaria, el artículo 2311 habla de *objetos corporales*. La ley 17.711 cambió la palabra *corporales* por *materiales*, con lo que la idea se clarifica. No se trata ya de saber si las cosas son corpóreas, si tienen un cuerpo, sino si son materiales, si entra una materia física en su composición. Resulta así muy claro que son cosas todas las que ocupan un lugar en el espacio, sean sólidas, líquidas o gaseosas.<sup>6</sup>

Se vincula estrechamente con esto, la cuestión de si las energías son o no cosas. La ley 17.711 agregó al artículo 2311 un apartado que resuelve expresamente la cuestión: *las disposiciones referentes a las cosas son*



*aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.*

Aunque la ley no diga que las energías (electricidad, energía atómica, atracción magnética) son cosas, al atribuirle la misma condición jurídica, les reconoce la calidad de tales. En derecho lo que cuenta son los efectos; si las energías apropiables tienen igual condición jurídica que las cosas, son cosas.

Por lo demás, hace notar Rotondi que las categorías jurídicas no presuponen identidad con las categorías y conceptos de otras ciencias y se inspiran más bien en apreciaciones vulgares; tiene la energía un contenido económico susceptible de goce y disposición que la asimila a las cosas. Entre el gas y la electricidad que se consumen en una casa, es difícil establecer diferencias conceptuales desde el punto de vista jurídico; ambos sirven de energía calórica y lumínica, ambos se consumen con el uso, pueden medirse, tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación. ¿Con qué fundamento jurídico podrá establecerse entre ellos una diferencia que permita clasificarlos en categorías distintas? El concepto de *bien* debe reservarse para los *derechos*; todos los demás objetos económicamente valiosos son cosas.

Ahora bien: para que pueda tener valor económico, la cosa debe ser susceptible de aprehensión por los individuos. Por ello, el aire, el mar, que no pueden ser poseídos exclusivamente por nadie y que están al servicio de todos los hombres, no son, jurídicamente hablando, cosas.

**521.**— La palabra *bienes* es usada en nuestra legislación con dos significados distintos. En su acepción genérica, designa todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (art. 2312, Cód. Civ.); las cosas quedan, pues, incluidas dentro de este concepto general. En su significado restringido *bienes*, por oposición a cosas, designa los objetos inmateriales económicamente valiosos, es decir, los derechos patrimoniales.

Cabe señalar en este punto una notable contradicción entre el texto de los artículos 2311 y 2312 del Código Civil y la nota al primero. Mientras que en aquéllos, como se ha dicho, bienes es el género y cosas la especie, en la nota citada Vélez Sarsfield explica estos conceptos atribuyéndoles un sentido precisamente inverso. Naturalmente, lo único que tiene valor legal es el texto de los artículos; de modo que la nota debe conside-

rase no escrita. El hecho, sin embargo, es interesante, porque prueba que Vélez Sarsfield modificó a veces el articulado sin rehacer las notas, lo que debilita mucho el valor interpretativo de éstas.

#### A.—CLASIFICACION DE LAS COSAS

**522. Distintas categorías.**— Consideradas en sí mismas, las cosas se clasifican, según nuestro Código Civil (arts. 2313 y sigs.), en muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, divisibles e indivisibles, principales y accesorias, en el comercio y fuera de él. Las estudiaremos por separado.

##### 1.—Cosas muebles e inmuebles

**523. Notión general.**— La posibilidad de moverse preside esta primera y más importante división de las cosas. Los inmuebles se encuentran fijos en un lugar: los muebles, en cambio, pueden trasladarse de un sitio a otro, ya sea por sus propios medios (semovientes) o por una fuerza externa. Esta regla, sin embargo, no es absoluta pues la ley, por razones que en su momento veremos, suele atribuir el carácter de inmuebles a cosas que pueden ser transportadas; e inclusive, aunque esto es excepcional, considera muebles a otras que están fijas en un lugar.

**524. Cosas inmuebles.**— Los inmuebles pueden ser tales por su naturaleza, por accesión, por destino, o por su carácter representativo.

a) *Inmuebles por naturaleza.* Según el artículo 2314 del Código Civil, son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmóviles; *como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad; todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre.*

Esta es una inmóvilidad natural, que no depende del obrar humano. Abarca, ante todo, la tierra misma, con sus superficies sólidas o fluidas; se comprenden en este concepto inclusive los ríos porque, aunque sus aguas

se desplazan, el cauce permanece siempre en el mismo lugar. Asimismo, lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, como son los vegetales en general (árboles, cereales, plantas florales, etc.). Pero la incorporación debe tener carácter permanente; de ahí que los almácgos, que están destinados a transportarse de un lugar a otro, sean muebles (nota al art. 2315). Tampoco son inmuebles las plantas de maceta, puesto que no están incorporadas al suelo y pueden moverse.

Finalmente, alude el artículo comentado a *todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre*. Tal es el caso de los minerales sólidos, líquidos o gaseosos: minas de metales preciosos, napas petrolíferas o gaseosas, etcétera. Pero los cimientos de un edificio, los tesoros enterrados por el hombre, no son inmuebles por su naturaleza: los primeros lo son por accesión (art. 2315, Cód. Civ.); los segundos son muebles (art. 2319).

La inmovilización, casi está demás decirlo, cesa no bien las cosas dejan de estar incorporadas al suelo o de tomar parte de él. Los minerales extraídos, los frutos cosechados, son muebles desde el instante en que se los separa de la tierra.

b) *Inmueble por accesión física. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión tenga carácter de perpetuidad* (art. 2315, Cód. Civ.).

La razón es que dichas cosas forman un todo inseparable con el suelo, sin el cual, por así decirlo, no se concibe su existencia. Tal sería el caso de los edificios, pues no obstante haberse formado de partes muebles (ladrillos, cemento, cañerías, puertas, ventanas, etc.), el todo forma algo separado y diferente de las partes, que sólo puede existir adherido físicamente al suelo. Son también inmuebles de esta clase los molinos, las galerías de una mina, los pozos de petróleo, etcétera.

La adhesión física al suelo debe tener carácter de perpetuidad, es decir, que tendrá que haberse realizado con el propósito de hacerla durar todo el tiempo que su conservación lo permita. Las adhesiones transitorias no son inmuebles; tal es el caso de los pabellones de una exposición, la tienda de un circo, los galpones levantados para guardar materiales de una obra, etcétera.

A diferencia de los inmuebles por destino, no interesa aquí la perso-

na que realiza la adhesión; puede ser el propietario, el arrendatario, el simple poseedor a título precario, pues ello no altera el hecho de la adhesión física, determinante de la inmovilidad.

c) *Inmuebles por destino*. Se llaman inmuebles por destino las cosas muebles puestas por el propietario al servicio de un inmueble (arts. 2316 y 2325, Cód. Civ.). Para que estas cosas, que no quedan adheridas al suelo, ni inmovilizadas, sean reputadas inmuebles, es necesario: 1º) que hayan sido puestas al servicio del inmueble; debe haber entre el fundo y los muebles una relación de destino, de modo que éstos sirvan a la finalidad de aquél; 2º) que hayan sido puestas en él con carácter permanente; 3º) que las haya colocado el propietario, sus representantes, o los arrendatarios, en ejecución del contrato de arrendamiento (art. 2320, Cód. Civ.). Si hubiesen sido puestas por los usufructuarios, sólo se considerarán inmuebles mientras dure el usufructo (art. 2321, Cód. Civ.).

Ejemplo de inmueble por destino son los arados y útiles de la labranza de un fundo, los bancos de un colegio, el lecho, mesas, sillas de una casa habitación, etcétera. En cambio no lo son el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros y las joyas, las ropas de uso, los granos, caldos, mercaderías, ni otras cosas que no forman el ajuar de la casa (art. 2323, Cód. Civ.). Casi era innecesario que la ley lo dijera expresamente, porque es evidente que estas cosas no están al servicio del inmueble.

La inmovilización por destino cesa desde que las cosas han sido retiradas del fundo por quien tenga derecho a hacerlo.

d) *Inmuebles por carácter representativo. Son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis* (art. 2317, Cód. Civ.).

La ley habla solamente de instrumentos públicos, porque se exige la escritura pública siempre que se trate de constituir o transmitir derechos reales sobre inmuebles (art. 1184, inc. 1º, Cód. Civ.).

Debe constar en ellos la adquisición de derechos reales, pues los instrumentos que comprueban derechos personales son muebles (art. 2319); y deben recaer sobre bienes inmuebles.

La exclusión de la hipoteca y la anticresis obedece a que son acceso-

rios de un derecho personal, al cual sirven de garantía y, por tanto, deben seguir la suerte de éste, que se repita mueble (art. 2319, *in fine*).

**525. Cosas muebles.**— Las cosas pueden ser muebles por su naturaleza o por su carácter representativo.

a) *Muebles por naturaleza.* Son muebles por naturaleza las cosas que pueden ser transportadas de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que sean accesorias de los inmuebles (art. 2318, Cód. Civ.). Las que se mueven por sí solas se llaman semovientes.

La última parte del artículo excluye a las cosas que, siendo transportables, son accesorias de un inmueble, pues en este caso se aplicarán los artículos 2315 y 2316 (v. núm. 524, c1).

En el artículo 2319 el Código alude a diversas hipótesis que podrían resultar dudosas y afirma que son muebles: 1º) *todas las partes sólidas o fluidas del suelo, separadas de él, como las piedras, tierras, metales, etcétera*; dentro de este concepto quedarán los árboles, las plantas y sus frutos, una vez separados del suelo; 2º) *las construcciones asentadas en la superficie del suelo con carácter provisorio*, tales como los pabellones de una exposición, la tienda de un circo, etcétera; 3º) *los tesoros, monedas y otros bienes puestos bajo el suelo*; 4º) *los materiales reunidos para la construcción de edificios*, mientras no estén empleados; 5º) *los que provengan de una destrucción de los edificios*, aunque los propietarios hubieran de construirlos inmediatamente con los mismos materiales. Se discute si esta disposición es aplicable al caso de la reparación de edificios; por nuestra parte pensamos que sí lo es, porque la ley no establece ninguna distinción entre destrucción total o parcial, ni entre aquella que es provocada intencionalmente por el hombre y la que es consecuencia de un fenómeno extraño, y esto es lo lógico, porque cualquiera que sea la razón por la cual una cosa inmovilizada ha sido retirada del fundo y ha recuperado su movilidad, debe reputársela mueble.

b) *Muebles por su carácter representativo.* Según el artículo 2319, *in fine*, son muebles por su carácter representativo todos los instrumentos públicos o privados en los que conste la adquisición de derechos personales; asimismo lo son los instrumentos públicos donde constaren derechos reales de hipoteca y anticresis (arg. art. 2317, *in fine*) y los públicos

o privados que comprueben la existencia de derechos reales sobre cosas muebles.

**526. Semovientes y locomóviles.**— Dentro de las cosas muebles existen dos especies que en nuestros días exigen un tratamiento especial: los *semovientes*, cuyo significado en la riqueza nacional resulta obvio destacar, y los *locomóviles*, que tienen hoy un gran valor económico. Esta necesidad resulta particularmente evidente en materia de transmisión de la propiedad; no es posible que el ganado o los automotores puedan enajenarse como cualquier otra cosa mueble, sin formalidad alguna, por la simple tradición. Este es, sin embargo, el régimen del Código Civil; y si es explicable que Vélez no pudiera prever el problema de los automotores, en cambio no se justifica la omisión de un régimen especial para los ganados, cuando en su época estaba en plena vigencia el sistema de la marca.

**527.**— En cuanto a los semovientes, la omisión del legislador fue llenada por los Códigos rurales, que establecieron la formalidad de la marca y de la señal registrada para la transmisión de la propiedad del ganado. Esto importaba una exigencia no contenida en el Código Civil y por tanto inválida, ya que para éste basta la tradición. Pero la jurisprudencia, siguiendo una idea de Biblioni, supo conciliar el régimen del Código con la exigencia de la marca y de la señal: como la propiedad de las cosas muebles se adquiere por la posesión de buena fe (art. 2412), se ha decidido que no puede invocarse buena fe el poseedor de ganado que no ha cumplido con el régimen de marcas y señales, impuesto no sólo por las leyes locales, sino también por una larga costumbre.

**528.**— En cuanto a los automotores, la transmisión de su dominio deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Automotor (art. 1º, decreto-ley 6582/1958).

Respecto de las aeronaves, la transmisión de su propiedad puede hacerse por instrumento público o privado, pero sólo producirá efectos respecto de terceros desde su inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves (art. 50, ley 17 285).

**529. Importancia de la clasificación.**— Desde el derecho romano, la clasificación de las cosas en muebles e inmuebles reviste un gran interés legal. En la antigüedad, la tierra tenía una importancia fundamentalísima en relación a los valores mobiliarios; era la base principal de la riqueza individual y el centro de cohesión de la familia. En la sociedad feudal no sólo confería fortuna y nobleza, sino que implicaba poder político. En cambio, los bienes muebles tenían un valor prácticamente despreciable, en relación a los inmuebles. Se decía: *res mobiles, res vilis*. De ahí surgió la necesidad imperiosa de establecer un régimen distinto para unas y otras.

Pero el desarrollo del comercio y, posteriormente, de la gran industria, dieron lugar a la creación de inmensas riquezas mobiliarias, cuyo monto y valor superan hoy, sin duda, a las inmobiliarias. Las grandes fortunas de nuestros días son las de los industriales y comerciantes y no las de los propietarios de tierra. Ya no puede decirse, como antaño, que las cosas muebles son viles o despreciables. Inclusive ha llegado a sostenerse que la distinción clásica entre muebles e inmuebles responde a exigencias económicas totalmente superadas y que hoy resulta artificiosa e inútil, debiendo ser substituida por la clasificación de cosas registrables (cuando así lo imponga su importancia económica y lo permita la posibilidad de individualizarlas) y no registrables. Pero hay en esto una exageración evidente. Es un grueso error pensar que la tierra ha perdido su preponderancia económica y social. Basta recordar, para convencerse de ello, que uno de los temas que hoy dividen al mundo en dos campos antagónicos, es el de la propiedad privada sobre la tierra. Todo lo que es más esencial a la vida humana, la alimentación, el vestido, dependen de la producción agropecuaria; el ideal tan adentrado en el corazón de los hombres de la vida propia, requiere la posesión de un solar. Por eso el régimen de la tierra se vincula con los fundamentos mismos de la organización política y social de los pueblos: ello explica también la solidez de los valores inmobiliarios. De ahí que todavía hoy se justifique un tratamiento legislativo distinto respecto de las cosas muebles. Sin embargo, es preciso reconocer que la división clásica resulta al presente un poco estrecha, porque el legislador ha embreñado a todas las cosas muebles en un régimen único, sin establecer entre ellas las distinciones que impone su muy variada naturaleza y valor. Tal es, por ejemplo, el caso de los semovientes, los locomó-

viles y, en general, las maquinarias de gran valor económico, susceptibles todos del régimen del registro.

**530.**— En nuestro derecho, esta división tiene las siguientes consecuencias:

a) Las cosas inmuebles se rigen por la ley del lugar en que están situadas, en lo que atañe a todo su régimen jurídico: derechos de las partes, capacidad para adquirirlas, modos de transferirlas y formalidades que deben acompañarlas (art. 10, Cód. Civ.); en todo lo que se refiere al régimen de la tierra, la aplicación de la ley extranjera está vedada. En cambio, respecto de los bienes muebles, hay que hacer una distinción: los que tienen una situación permanente y se conservan sin intención de transportarlos, se rigen por la ley del lugar en que están situados; pero los que el propietario lleva consigo o son de uso personal, se gobiernan por la ley del domicilio del dueño (art. 11, Cód. Civ.).

b) La transmisión de bienes inmuebles o la constitución de derechos reales sobre ellos deben hacerse por escritura pública (art. 1184, inc. 1°, Cód. Civ.); los negocios sobre bienes muebles, en cambio, pueden hacerse por instrumento privado o sin formalidad alguna, salvo casos especialmente previstos por la ley.

c) La adquisición de inmuebles por prescripción requiere largos plazos de posesión continuada: diez años, si la posesión es de buena fe y a justo título (art. 3999, Cód. Civ.); veinte años si carece de estos requisitos (art. 4015, Cód. Civ.). En cambio, tratándose de muebles, la posesión de buena fe otorga instantáneamente el derecho de propiedad, salvo que la cosa fuere robada o perdida (art. 2412, Cód. Civ.).

d) Los derechos reales de hipoteca y anticresis sólo pueden recaer sobre inmuebles (arts. 3108 y 3239); la prenda únicamente puede constituirse sobre muebles (art. 3204).

e) La protección legal del patrimonio de los incapaces de hecho, se manifiesta de manera más estricta con referencia a los inmuebles. Los padres no pueden enajenar ni gravar los inmuebles de sus hijos sin autorización judicial (art. 297).

El principio de que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que gozaba no se aplica a los muebles (art. 3271, Cód. Civ.).

## 2.— Cosas fungibles y no fungibles

**531. Concepto.**— *Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden substituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad* (art. 2324, Cód. Civ.). Los ejemplos clásicos son el trigo, el vino, etcétera, que siendo de la misma calidad, son perfectamente reemplazables.

Por lo general pueden venderse o negociarse por peso, cantidad o medida: cien quintales de maíz, diez hectolitros de vino, veinte metros de tela, etcétera. Pero la característica típica o esencial consiste en la posibilidad de que un individuo de la especie pueda ser reemplazado por otro de la misma especie. Tal es el caso de los libros nuevos de una misma edición, o de las cosas *standard*: un automóvil recién salido de la fábrica es perfectamente reemplazable por otro de la misma serie. Solamente los muebles pueden ser fungibles.

Por el contrario, cosas no fungibles son aquellas que no pueden reemplazarse las unas por las otras, de una manera perfecta; así, por ejemplo, un fundo no puede ser reemplazado por otro, ni lo puede ser un caballo de carrera, aunque ambos animales tengan el mismo *pedigree*.

**532.**— La distinción de cosas fungibles y no fungibles se funda por lo común en la naturaleza misma de aquéllas; pero a veces hay factores subjetivos, propios del dueño, que determinan el carácter de la cosa. Así, por ejemplo, un libro nuevo es fungible respecto de otro ejemplar de la misma edición, pero si ese volumen tiene para el propietario un valor subjetivo especial, ya sea porque fue un regalo del autor, o porque se vincula con algún recuerdo personal, deja de ser sustituible. A la inversa, una cosa en sí misma no fungible puede llegar a serlo por voluntad de los interesados: tal ocurriría si se vendieran cien ovejas, dentro de un lote de mil, a elección del vendedor; éste puede reemplazar cualquiera de los animales por otro.

**533. Importancia de la distinción.**— Esta clasificación tiene impor-

tancia en materia de obligaciones de dar. Si la cosa no fuere fungible, sólo quedará pagada la obligación con la entrega de la cosa misma; si, por el contrario, fuese fungible, el obligado puede entregar a su elección cualquier cosa de la misma especie y calidad. El Código ha reglado detalladamente los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas e inciertas en los artículos 574 y siguientes.

## 3.— Cosas consumibles y no consumibles

**534. Concepto.**— Según nuestro Código, son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso y que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo (art. 2325).

Las cosas consumibles son, pues, aquellas que desaparecen con el primer uso, sea porque se destruyen materialmente, como los alimentos o las bebidas, o sea porque salen del patrimonio de aquél a quien pertenecen, como el dinero. Ejemplo de cosas no consumibles son el vestido de una persona, un libro, un automóvil.

Algunos ejemplos no son tan típicos: tal es el caso del papel de escribir, que debe considerarse consumible aunque no salga del patrimonio del dueño, porque ya no puede volver a usarse para su destino normal.

Como en el caso de las cosas fungibles, la consumibilidad depende, en principio, de su misma naturaleza; sólo por excepción, *el destino* que le dé su propietario, puede alterar su carácter. Así, por ejemplo, un libro no es, por su naturaleza, consumible; pero si lo es para el librero, que lo adquiere para venderlo; en esto consiste para él su utilidad y, desde luego, con el primer uso (la venta) desaparece de su patrimonio.

**535. Paralelo con las cosas fungibles.**— Con frecuencia, las cosas fungibles son también consumibles; en los ejemplos más típicos ambas características marchan generalmente unidas, tal es el caso de los cereales, las bebidas, la mayor parte de los alimentos, el dinero, etcétera. Exagerando este paralelo, algunas leyes como el Código español (art. 337) y el holandés (art. 561) identifican ambas categorías, disponiendo que son

fungibles las cosas que se consumen por el primer uso. Pero esto importa un evidente error: no hay entre ambas categorías de cosas una relación necesaria, puesto que responden a conceptos distintos. Lo prueban numerosos ejemplos: los libros, la mayor parte de los productos *standard*, son fungibles pero no consumibles.

#### 4.— *Cosas divisibles e indivisibles*

**536. Criterio de la distinción e interés práctico.**—Según nuestra ley, son cosas divisibles aquellas que pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo, tanto a las partes como a la cosa misma (art. 2326, Cód. Civ.). Ejemplos: la tierra, los granos, la moneda. En cambio, las cosas indivisibles no pueden ser partidas sin destruirías: una mesa, un sombrero, una joya, etcétera.

Esta clasificación de la cosa tiene interés sobre todo en lo que respecta a la partición de la herencia, pues sólo puede exigirse la partición real de las cosas divisibles.

**537. El dinero.**—Repetidamente hemos citado el dinero como ejemplo característico de cosa *mueble, fungible, consumible y divisible*, pero no agotaríamos con ello la configuración jurídica de este bien.

El dinero es una cosa que sirve para procurarse otros bienes; a la inversa de lo que ocurre con las demás cosas, no presta por sí mismo ninguna utilidad económica, no proporciona al hombre ningún placer (salvo el goce patológico del *avaro* que recuenta sus monedas); pero sirve como intermediario en el trueque de cosas y bienes; con ese objeto ha sido creado y garantizado por el Estado y está sujeto a su vigilancia.

Es una creación ideal: se toma un valor cualquiera, al que se le asigna la función de servir de unidad, se le da un nombre, independientemente de sus cualidades corporales, y se lo lanza a la circulación, ya íntegro, ya dividido en sus múltiplos y submúltiplos, para que cumpla esa tarea de medir los demás valores materiales.

Este dinero, así creado por el Estado, constituye el *medio normal de pago*. Aun cuando la obligación consista en dar cosas que no son dinero, puede ocurrir que sea imposible su cumplimiento en especie, y entonces aquélla se resuelve en el pago de una suma de dinero. Lo mismo ocurre en

caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer, o de los daños ocasionados por un hecho ilícito.

Por consiguiente, a las calidades antes aludidas del dinero, debemos agregar la de *numeralidad*, pues es representativo de una unidad ideal, y la de *legalidad*, pues tiene curso legal obligatorio como instrumento de pago.

El estudio del dinero en su faz económica es materia propia de la Economía Política.

#### 5.— *Cosas principales y accesorias*

**538. Concepto e interés práctico.**—Para que esta división sea posible, es necesario, ante todo, que nos encontremos en presencia de dos o más cosas unidas con el mismo fin. En tal caso, debe haber una relación de dependencia o subordinación de la una para con la otra, de tal modo que ésta siga la suerte de la primera o viceversa.

Las cosas principales pueden definirse como aquellas que tienen una existencia propia, determinada por ellas mismas y con prescindencia de las demás (v. art. 2327, Cód. Civ.). Accesorias, en cambio, son las que tienen su existencia y naturaleza determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas (art. 2328). En un cuadro, la tela es la cosa principal, el marco lo accesorio; en un anillo, lo principal es la piedra, lo accesorio el engarce.

La condición y naturaleza jurídica de las cosas accesorias se determina por la de la principal: *accessorium sequitur principale*; principio este acogido expresamente en nuestra ley (art. 2328).

**539. Frutos y productos.**—Se llaman frutos a las cosas que provienen periódicamente de otra, sin alterar su substancia. Tal es el caso de la fruta de un árbol, el grano de los cereales, etcétera. Los productos, en cambio, provienen también de una cosa, pero una vez extraídos, no se renuevan en ella y la dejan así disminuida en su substancia; por ejemplo, el mineral de un yacimiento. Un caso que ofrece algunas dificultades es el de la madera de un bosque. Si el bosque se tala con el propósito de no renovar-lo, como ocurriría si se deseara cultivar la tierra, los cortes de madera son

productos, pero si se trata de cortes regulares y periódicos y se permite o se favorece la reproducción de los árboles, son frutos.

Mientras están agregados a la cosa principal, los frutos y productos son accesorios de ella, con la cual forman un todo (art. 2329. Cód. Civ.).

**540.**— La distinción entre frutos y productos tiene particular importancia en cuanto a los efectos de la posesión, pues el poseedor de buena fe hace suyos los primeros, si los hubiere percibido, pero en cambio debe restituir los productos (arts. 2423 a 2425, Cód. Civ.). También la tiene en materia de usufructo, porque el usufructuario debe servirse de la cosa sin alterar su substancia (art. 2807), con lo que está dicho que no puede utilizar los productos que, como hemos visto, la disminuyen, y con relación a la sociedad conyugal, porque los frutos de los bienes propios son gananciales, no así los productos, que conservan la calidad de propios (art. 1272, Cód. Civ.).

**541. Clases de frutos.**—Según nuestro Código, los frutos pueden ser naturales, industriales y civiles.

a) Son *frutos naturales* las producciones espontáneas de la naturaleza (art. 2424), es decir, los que se producen sin la intervención de la mano del hombre. Ejemplo: la cría de los animales, la leche.

b) Son *frutos industriales* los que resultan de la industria del hombre o del cultivo de la tierra (art. 2424), como los cereales, las verduras, las flores obtenidas por el floricultor.

c) Finalmente, son *frutos civiles* los que provienen del uso y goce de la cosa concedida a otro, como el alquiler de una finca, el interés del dinero, el precio del usufructo; o los que provienen de la privación del uso de ella, como las indemnizaciones que la ley acuerda al propietario por el despojo o la destrucción de la cosa que le pertenece; y, por fin, los salarios u honorarios derivados del trabajo material o intelectual (art. 2330, Cód. Civ.).

El Código repula accesorios a los frutos civiles. No los produce la cosa, como los naturales o industriales; no se relacionan con ella en un sentido material. Pero la ley los vincula estrechamente, bien con la cosa, bien con el trabajo del hombre, en los cuales han tenido origen.

**542. Cosas adheridas al suelo.**—Las cosas que natural o artificialmente están adheridas al suelo son accesorias de él (art. 2331); tales los árboles, los edificios. Agrega el Código en el artículo siguiente, que las cosas adheridas a las cosas adherentes al suelo son accesorias de los predios. Era innecesario decirlo, pues esta disposición queda implícita en el artículo anterior.

La aplicación práctica de estos artículos se hallará en los derechos reales, al tratar los problemas que plantea la edificación y la plantación (arts. 2587 a 2592).

**543. Cosas muebles adheridas a otras muebles.**—Los artículos 2333 a 2335 establecen varias reglas prácticas para resolver los casos dudosos acerca de cuál es la cosa principal y cuál la accesoría.

a) *Cuando las cosas muebles se adhieren a otras muebles sin que se altere su sustancia, serán cosas principales aquellas a que las otras no se hubiesen unido sino con el fin de uso, ornato, complemento o conservación* (art. 2333). Tal ocurre con la malla de un reloj, el engarce de un anillo, el marco de una tela. Es indiferente, en este caso, el valor de una u otra cosa; desde que el destino de una de ellas es servir a la conservación, lucimiento, etcétera, de la otra, es accesoría de ésta. Pero bien entendido que la adhesión o unión no debe alterar la sustancia de ninguna de ellas, como ocurriría en la fusión de varios metales, porque entonces habría una sola cosa.

b) *Si las unas se han adherido a las otras, para formar un todo, sin poderse distinguir la accesoría de la principal, se tendrá por principal la de mayor valor. Si los valores fuesen iguales, la de mayor volumen. Si los valores y los volúmenes fueren iguales, no habrá cosa principal ni cosa accesoría* (art. 2334).

c) *Las pinturas, esculturas, escritos e impresos, serán siempre reputados como principales, cuando el arte tenga mayor valor e importancia que la materia en que se ha ejercido, y como accesorios la tabla, lienzo, papel, pergamino o piedra a que se hubiesen adheridos* (art. 2335).

El respeto por el trabajo humano ha inspirado esta regla, dándole prevalencia sobre la materia que le ha servido para realizarla obra. Pero la norma no podía ser absoluta. Sobre todo cuando se trata de cineado de

metales o piedras preciosas, es frecuente que éstos tengan un valor económico muy superior al trabajo del artista o artesano; en tal caso, la materia es la cosa principal.

#### 6.— *Cosas dentro y fuera del comercio*

**544. Concepto.**— Las cosas están en el comercio o fuera de él, según puedan o no servir de objeto a relaciones jurídicas patrimoniales.

En el derecho romano el concepto era distinto. Llamábase *res in commercium* aquellas sobre las cuales los particulares podían ejercer un derecho; por el contrario, las *extra commercium* no eran susceptibles de apropiación individual. Pero en el derecho moderno, la comercialidad de las cosas no se vincula con la apropiación y goce sino con la posibilidad de enajenarlas o disponer de ellas.

Por eso dice nuestro Código que están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública; en el primer caso, son absolutamente inenajenables; en el segundo, lo son relativamente.

**545. Cosas absolutamente inenajenables.**— Según el artículo 2337, son absolutamente inenajenables:

1º) *Las cosas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley*; tal es el caso de los bienes del dominio público del Estado, de la indemnización por accidentes del trabajo, etcétera. La prohibición legal obedece siempre a razones de orden público, o bien a la protección de los incapaces o débiles.

2º) *Las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad, en cuanto este Código permitia tales prohibiciones*. El carácter pleno que en este principio tiene el derecho de propiedad, no se aviene con las limitaciones contractuales que puedan haberse establecido en el título de constitución del dominio. Sin embargo, en algunos casos, la ley autoriza ciertas limitaciones. Así, por ejemplo, es lícita la prohibición de enajenar una cosa a persona determinada (art. 1364, Cód. Civ.); también lo es la de vender los bienes donados o legados por un término no mayor de diez años (art. 2613).

**546. Cosas relativamente inenajenables.**— Son relativamente inenajenables las cosas que necesitan una autorización previa para su enajenación (art. 2338); cabe citar como ejemplos los bienes privados del Estado, cuya venta requiere autorización legislativa; los bienes de los menores y dementes, los inmuebles pertenecientes a los emancipados, etcétera.

**547. Derechos inenajenables.**— No sólo las cosas son inenajenables; también lo son ciertos derechos. Fundada, por lo general, en razones de protección a los débiles, la ley prohíbe la enajenación, renuncia o embargo de ellos. Entre los numerosos derechos que no pueden cederse citamos, por vía de ejemplo, el de reclamar alimentos futuros, los beneficios que conceden las leyes de trabajo y previsión social, etcétera.

#### B.— LAS COSAS CON RELACION A LAS PERSONAS

##### I.— *Bienes del Estado*

**548. Bienes públicos: enumeración legal.**— El Estado, sea nacional o provincial, posee bienes públicos y privados (art. 2339). La ley no ha definido el concepto de unos y otros, limitándose a enumerarlos. Analizaremos estas disposiciones para extraer después las nociones jurídicas que nos interesan.

El artículo 2340, en la nueva redacción dada por la ley 17.711, enumera los siguientes bienes públicos:

1) *Los mares territoriales hasta la distancia que fije la legislación especial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua*. El anterior inciso 1º fijaba una distancia de una legua marítima y de cuatro para el ejercicio del derecho de policía. La nueva disposición ha optado por dejar librado el punto a la reglamentación, considerando que los intereses nacionales pueden exigir una mayor extensión que la que determinaba el anterior inciso 1º.

2) *Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros*. La redacción de este inciso se ha mantenido sin variación. No se incluyen golfos, cuya amplitud hace aconsejable que rija en ellos la libertad de navegación.



3) *Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiriera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación.* La primera parte de este inciso, relativa a los ríos y demás aguas que corren por sus cauces naturales, estaba contenida en el originario inciso 3°. Todo lo restante fue agregado por la ley 17.711. Cabe notar que Vélez se había apartado de sus fuentes, que sólo atribuían el carácter de bienes públicos a los ríos navegables o flotables, comprendiendo en esta disposición a todos los cursos de agua. El acierto es evidente, pues la navegabilidad o el transporte no es la única utilidad pública que prestan los ríos, que pueden servir de regadío, como fuente de energía eléctrica, etcétera. De ahí que no interesa la importancia del volumen de las aguas de un arroyo. También quedan comprendidos en esta primera parte de la norma, los cauces de los ríos o arroyos. Sólo los arroyos que nacen y mueren en una misma heredad pertenecen exclusivamente a su dueño (art. 2350).

El agregado hecho por la ley 17.711 ha previsto el caso de toda agua que satisfaga un interés general y particularmente las aguas subterráneas. La disposición tiende a permitir el uso público de las aguas subterráneas y a evitar que el dueño del suelo pueda hacer una extracción excesiva e irracional que perjudique a los otros vecinos y a la comunidad. Los estudios geológicos han puesto de relieve la existencia de napas acuíferas importantes y muy dilatadas, cuyo aprovechamiento debe ser regulado para evitar su agotamiento temporal o definitivo. Por ello, la ley establece que la extracción debe hacerse en la medida del interés del propietario del suelo y conforme a la reglamentación, que por cierto podrá limitar la cantidad que puede extraer el propietario.

4) *Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias.*

5) *Los lagos navegables y sus lechos.* Originariamente el Código exigía que fuera navegable por buques de más de 100 toneladas, lo que evidentemente era excesivo. Adviértase que aun los lagos y lagunas no navegables pueden pertenecer al dominio público si tienen aptitud para

satisfacer un interés general, tal como lo dispone el inciso 3°. Por otra parte, es muy difícil que un espejo de agua no pueda ser navegado por lanchas que no tienen más que un calado mínimo. Deben exceptuarse, aunque el inciso no lo diga, los lagos o lagunas que están dentro de una sola heredad, pues es de aplicación analógica el artículo 2350.

6) *Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares.* El anterior inciso 6° no hacía la salvedad final, de lo que resultó la curiosa situación de que mientras el Código establecía que las islas pertenecían al dominio público del Estado, la mayor parte de ellas eran de propiedad particular (el fenómeno era especialmente notable en el delta del Paraná) y el Estado se vio obligado a respetar esos derechos apoyados en un esfuerzo de largos años que era injusto desconocer, tanto más cuando que coincidía con el interés general del aprovechamiento de la tierra. La reforma de 1968 ha contemplado el problema, dejando fuera del dominio del Estado las islas que pertenezcan a particulares. Claro está que no sólo se refiere a las islas que en el momento de entrar en vigencia la ley 17.711 están en esa condición. También puede ocurrir que el Estado nacional o provincial desafecte del dominio público algunas islas y las venda a particulares.

7) *Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.* Este inciso, que la ley 17.711 no modificó, ofrece algunas dificultades en la interpretación de lo que debe entenderse por obras construidas para utilidad o comodidad común. Algunos autores piensan que todos los edificios públicos (oficinas, correos, etc.) están comprendidos en él, puesto que todos ellos prestan una utilidad común. Por nuestra parte estamos en desacuerdo con este punto de vista. De la enumeración hecha en el artículo 2340 surge muy claramente que lo que caracteriza el dominio público del Estado, es la circunstancia de que todos los ciudadanos tienen el uso y goce inmediato de él: ésta es la utilidad o comodidad común a que alude el inciso. De lo contrario, todos los bienes del Estado deberían incluirse en el dominio público, pues todos ellos tienen una finalidad mediana o inmediata de interés general. ¿Que cosa la tiene más que los fuertes de guerra o los ferrocarriles? Y, sin embargo, están expresamente enumerados entre los bienes del dominio privado del Estado (art. 2342, inc. 4°).

Entre las obras de uso común que deben considerarse incluidas en este artículo, están los museos, bibliotecas, balnearios, campos deportivos y, en general, todos aquellos bienes susceptibles de goce directo por el pueblo.

8) *Los documentos oficiales de los poderes del Estado.*

9) *Las minas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.*

Estos últimos dos incisos fueron agregados por la ley 17.711. Se trata de proteger la documentación del Estado y evitar que ella pase a manos privadas, como también los tesoros arqueológicos y paleontológicos, que de esta manera dejan de pertenecer al propietario del suelo para convertirse en un dominio público. Con ello se trata de evitar el saqueo o la comercialización de estas riquezas, lo que infortunadamente ha ocurrido por largos años en nuestro país.

**549. Naturaleza y caracteres del dominio público.**—Aun cuando en la doctrina administrativa no existe acuerdo pacífico sobre el punto, es indudable que, en nuestro derecho, lo que caracteriza el dominio público del Estado es la posibilidad de aprovechamiento y goce directo de los bienes por el pueblo.

Sus caracteres esenciales son los siguientes: a) son *inalienables*, lo que se explica en razón de su destino; con ello va implícito que no pueden gravarse con hipoteca ni realizarse sobre ellos ningún acto de disposición; pero el Estado puede vender los frutos (como las flores de un paseo público, los cortes de un bosque) y aun puede conceder su uso exclusivo, mediante ciertas condiciones (por ejemplo, el permiso para instalar puestos de frutas, verduras u otras mercaderías en la vía pública, en las plazas), porque estos actos no afectan el uso y goce popular de la cosa; b) son *imprescriptibles* (arg. a contrario, art. 3951, Cód. Civ.), lo que es una consecuencia necesaria del carácter anterior; c) son de *uso gratuito* para todos los miembros de la comunidad.

**550.**—¿Es el dominio público del Estado un derecho de propiedad? Evidentemente no. El Estado es apenas un administrador que se limita a reglamentar su uso por los particulares; carece de todos los atributos esenciales del propietario; no puede gozar exclusivamente de la cosa, puesto

que su uso es común; no puede disponer de ella. Es más bien un dominio eminente del cual se desprenden algunas facultades que acompañan también a la propiedad: el derecho de reivindicar el bien, de ejercer acciones posesorias, de disponer de sus frutos, de conceder permisos particulares, etcétera.

**551. Afectación y desafectación de los bienes públicos.**—La afectación es el acto por el cual el Estado pone un bien a disposición de todos sus súbditos para que aprovechen de él, con miras al bien común. Así, por ejemplo, un inmueble de propiedad particular del Estado podría ser convertido en plaza o paseo público; basta para ello un acto administrativo, hecho por autoridad competente, o inclusive, un uso inmemorial.

Más delicado es el problema de la desafectación de un bien del servicio o utilidad común. Puede hacerse, ante todo, por ley del Congreso, pero también por una declaración de la administración o por un hecho de ella, en cuya virtud aparece indudable que la cosa ha dejado de servir directamente al fin de uso y goce público: la desafectación de hecho (campos abandonados, desviados, suprimidos, etc.), ha sido admitida reiteradamente por la Corte Suprema.

Una vez desafectado el bien, queda sujeto al régimen del dominio privado y, por lo tanto, es susceptible de embargarse, enajenarse, etcétera.

**552. Bienes del dominio privado.**—Son bienes del dominio privado del Estado aquellos que posee como persona jurídica y respecto de los cuales ejerce un verdadero derecho de propiedad, tal como está regido en el Código Civil.

Según el artículo 2342 del Código Civil, son bienes del Estado general o de los Estados particulares:

1º) *Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro dueño.* Este inciso tiene, entre nosotros, una explicación histórica. Al comienzo de la Edad Moderna, la Cristiandad atribuyó al Papa las tierras sin dueños. Usando de tal facultad, Alejandro VI acordó a los reyes de España y Portugal el dominio sobre los bienes descubiertos en América. La corona española, a su vez, los repartió entre los primeros conquistadores, para premiar sus empresas; pero, lógicamente, siguieron perteneciéndole aquellas tierras que no fueron adjudicadas. Después de la independencia, los derechos españoles pasaron a la

nación y, constituida ésta federalivamente, a la nación o las provincias, según donde estuvieren situadas.

El Estado tiene, pues, un título originario sobre las tierras sin dueño. De lo cual se deduce que no está obligado a justificar su dominio: por el contrario, son los particulares que lo invocan quienes deben acreditarlo.

2º) *Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y substancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra.* No sólo los minerales y metales enumerados en este inciso pertenecen al Estado; la tendencia moderna es a restringir cada vez más los derechos del propietario del suelo sobre los yacimientos o minas. Esta interesantísima y compleja cuestión es materia propia del derecho de minería.

3º) *Los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que mueren sin tener herederos, según las disposiciones de este Código.* Son vacantes los bienes inmuebles que, habiendo pertenecido a un particular, se encuentran abandonados por él. Se diferencian de las tierras sin dueño de que habla el inciso 1º en que éstas nunca pertenecieron a ningún particular. Mostrencos son los muebles que no tienen dueño.

4º) *Los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por los Estados por cualquier título.* Al aludir a los puentes se refiere este inciso a aquellos sobre los cuales el pueblo no tiene el uso directo, pues éstos están comprendidos entre los bienes públicos, según el artículo 2340, inciso 7º.

5º) *Las embarcaciones que diesel en las costas de los mares o ríos de la República, sus fragmentos y los objetos de su cargamento, siendo de enemigos o de corsarios.* Si no se tratare de enemigos o de corsarios, regirán las disposiciones que para los naufragios contienen los artículos 1283 y siguientes del Código de Comercio.

**553. Naturaleza y caracteres.**—El dominio privado del Estado es un derecho de propiedad regido por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Pero de la circunstancia de que el titular es el Estado y de que, por tanto, ese dominio está destinado a servir mediata o inmediatamente a la sociedad, surgen inevitablemente algunas diferencias con la propiedad privada. Es necesario, ante todo, distinguir dos clases de bienes:

a) Aquellos que están afectados directamente a un servicio público, como lo son las plazas de guerra, los ferrocarriles, los edificios públicos. Estos bienes *no son embargables*, puesto que no podría concebirse la paralización de un servicio público en virtud de la ejecución del crédito de un particular; pero el Estado puede venderlos, arrendarlos, etcétera, si bien estos actos están sujetos a formalidades legales más o menos rigurosas.

b) Los que no están afectados a un servicio público y cuya utilidad general es sólo mediata; tal sería el caso de las tierras sin dueños, de los bienes vacantes o mostrencos. Estos bienes son embargables, pueden venderse, gravarse, e inclusive, son susceptibles de ser adquiridos por prescripción por los particulares que los hubieran poseído.

## 2.—Bienes municipales

**554. Régimen legal.**—Son bienes municipales, dice el artículo 2344, *los que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades.* Las leyes de organización de las comunas determinan sus rentas y bienes.

Y puesto que estas entidades desempeñan en la vida política de un pueblo una función eminentemente estatal, forzosamente sus bienes están sometidos al mismo régimen jurídico que los del Estado. También ellos se dividen en públicos y privados, siendo de aplicación los principios estudiados precedentemente.

## 3.—Bienes de la Iglesia Católica

**555-556. Dominio público y privado.**—La primera cuestión que se presenta en lo que atañe a los bienes de la Iglesia Católica, es si ellos pertenecen a la iglesia universal o bien a las iglesias parroquiales locales. El Código ha resuelto que pertenecen a estas últimas (art. 2345, Cód. Civ.), adoptando así el criterio de los canonistas, quienes dejan a salvo el derecho de la alta administración que corresponde al pontífice romano.

La solución adoptada por nuestro Código es importante, porque con-

sagrada la independencia entre bienes de las iglesias y, por ende, la separación de sus patrimonios, los créditos o deudas de cada una serán también independientes y la Iglesia no responderá por ellos.

La vinculación estrecha que existe entre la Iglesia Católica y el Estado argentino, la protección que ella ha merecido de la Constitución y de las leyes de la Nación por ser la religión predominante en nuestro pueblo, la misión esencial que desempeña en la vida nacional, y el hecho de ser una persona de derecho público (art. 33, Cód. Civ.), imponen consagrar también respecto de sus bienes la distinción entre dominio público y privado. Formarán parte del primero los afectados directamente al culto, con todas las consecuencias que ello importa: inembargabilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad, mientras dure la afectación. Naturalmente, las autoridades eclesiásticas serán las únicas que pueden desafectar esos bienes.

**557. Iglesias no católicas.**— Todas las iglesias no católicas son, para nuestra ley, meras corporaciones, personas jurídicas de existencia posible (art. 33, Cód. Civ.). De ahí que no pueda hablarse en su caso de derecho público eclesiástico. Sus bienes, así sean los relativos al culto, se pueden enajenar, como los de cualquier persona jurídica, de acuerdo con sus estatutos (art. 2346, Cód. Civ.).

#### 4.— Bienes de los particulares

**558. Principio general.**— Después de enumerar nuestro Código cuáles son los bienes pertenecientes al Estado nacional o provincial, a las municipalidades y a la Iglesia, dice que todos los demás pertenecen a los particulares, sean personas naturales o jurídicas (art. 2347, Cód. Civ.).

Sin embargo, como algunos casos particulares podrían dar lugar a dificultades, en los artículos 2348 y siguientes se establecen las siguientes reglas:

a) *Los puentes y caminos, y cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares en terrenos que les pertenezcan, son del dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso o goce a todos* (art. 2348).

b) *El uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenece a los propietarios ribereños* (art. 2349).

La ley habla de *uso y goce*, no de propiedad. Esta queda reservada al Estado y forma parte de su dominio privado. Sólo en caso de que todo el lago esté incluido dentro de los límites de una misma heredad, creemos que debe reconocerse el derecho de propiedad al dueño de ésta. Tal es la solución que se desprende por aplicación análoga del artículo 2350.

c) *Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, pertenecen en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad* (art. 2350). Todas las demás corrientes de agua integran el dominio público del Estado (art. 2340, inc. 3°).

**559. Cosas susceptibles de apropiación privada.**— El artículo 2343 enumera las cosas sin dueño que cualquiera puede tomar para sí por medio de la apropiación. Este es un medio de adquisición del dominio que consiste en la aprehensión de las cosas muebles sin dueño o abandonadas por él, hecha por persona capaz de adquirir y con ánimo de apropiárselas (art. 2525).

1° *Los peces de los mares interiores, mares territoriales, ríos y lagos navegables, guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o fluvial.*

2° *Los enjambres de abejas, si el propietario de ellos no los reclama inmediatamente; el dueño, pues, debe perseguirlos de inmediato si quiere conservar su derecho sobre ellos* (v. arts. 2545 y 2546).

3° *Las piedras, conchas u otras substancias que el mar arroja, siempre que no presenten signos de un dominio anterior; si, por el contrario, se encontraran señales de una propiedad anterior, deben aplicarse las disposiciones relativas a las cosas perdidas.*

4° *Las plantas y yerbas que vegetan en las costas del mar, y también las que cubrieron las aguas del mar o de los ríos o lagos, guardándose los reglamentos policiales; este inciso no se aplica, como es obvio a los ríos y lagos que pertenecen al dueño de la heredad, quien tiene derecho exclusivo a las plantas y yerbas.*

5° *Los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos que se encuentran sepultados o escondidos, sin que haya indicios o memoria de quién sea su dueño, observándose las restricciones de la parte especial*

*de este Código, relativas a esas objetos.* Es decir que, deben observarse las disposiciones de los artículos 2550 y siguientes, referentes a tesoros. Si hay indicios de sus primitivos dueños y éstos no se hallaren, se los considerará cosas perdidas.

